



D- 3231/14-15

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 14 de Octubre de 2014.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN

*LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES*

DECLARA

Declara su rechazo y más profunda preocupación ante los hechos sucedidos en el Estado de Guerrero, México, en lo que se ha dado a conocer como la “masacre de Iguala”, ocurrida el 26 de setiembre pasado, donde han asesinado a 4 estudiantes normalistas y secuestrado a otros 43 que continúan desaparecidos. A su vez, declara su preocupación por la aparición de fosas con cadáveres, que se presume que pueden ser de los estudiantes normalistas secuestrados.

FUNDAMENTOS.-

El 26 de septiembre policías municipales dispararon a los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, mientras realizaban actividades de boteo para costear su viaje a la ciudad de México y para participar en la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco (1968) del 2 de octubre: en el acto fueron asesinados 4 normalistas y 25 personas resultaron heridas. Fue claramente un crimen político pues se trató de un ataque de policías municipales en contra de activistas estudiantiles. En el mismo acto, la policía municipal “levantó” a 43 estudiantes que al día de hoy continúan desaparecidos.

En un tercer ataque el mismo día fueron asesinados 4 civiles de un equipo deportivo. La masacre del 26 combina los métodos que han usado las fuerzas represivas en la “guerra contra el narco” contra la población civil. Tres días después, el 29, los normalistas confirmaron que uno de sus compañeros había sido desollado y exhibido en la vía pública: Julio César Mondragón fue encontrado sin vida desollado y sin ojos cerca de una zona industrial de Iguala. Esto constituye claramente un mensaje para aterrorizar a los luchadores sociales.

Debido a la presión internacional y a la repercusión mediática de la masacre el gobernador del estado, Ángel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se vio en la necesidad de “hacer una búsqueda extensiva”. Fue encontrada una fosa clandestina en Iguala con 24 cuerpos. Según una organización de derechos humanos, el Centro Tlachinollan, los cuerpos presentan con signos de tortura. Fueron quemados con gasolina antes de ser enterrados en una fosa clandestina. El propio gobernador del PRD tuvo que afirmar que los policías municipales están al servicio del “crimen organizado”, en particular del cártel Guerreros Unidos. En los días posteriores, se han descubierto 4 nuevas fosas comunes con decenas de cuerpos, aunque todavía no se sabe si corresponden a los estudiantes desaparecidos.

Según testimonios, los normalistas fueron levantados por policías municipales y ejecutados por la orden del cártel “Guerreros Unidos” que exige en “narcomantas” (pasacalles y banderas) la libertad de los policías detenidos. Es un crimen político del estado en asociación con los cárteles del narcotráfico. Mientras más elementos se dan a la luz, más abominable es la historia.

El 8/10 tuvo lugar una imponente marcha en México DF, con más de 60.000 personas, encabezada por estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y los padres de los jóvenes desaparecidos, que tuvo réplicas en más de 60 ciudades del interior y en distintas ciudades del mundo. Participaron todos los organismos de derechos humanos del país, organizaciones sociales y estudiantes de universidades como la UNAM, UAM, UACM y de las escuelas normales. El Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social también dijeron presente con importantes contingentes.

La masacre de Iguala se da en el marco del reciente escándalo de las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército en Tlatlaya, Estado de México, y de la lucha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional contra la aplicación de la reforma educativa en esa casa de estudios.

En 2013 en Guerrero brotó el inicio del descontento magisterial contra la reforma educativa. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizó un paro indefinido que puso a la defensiva al gobierno de Ángel Aguirre del PRD. Las acciones del magisterio pusieron de “cabeza” al estado y el magisterio desarrolló la unidad con otros sectores en lucha. El Movimiento Popular Guerrerense unificó los reclamos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la CETEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC) y con el

sostén de un plantón (acampe) en el centro de Chilpancingo realizaron acciones radicalizadas como la quema de las casas estatales de los tres principales partidos políticos (PRI-PAN-PRD) y el ingreso de las columnas armadas de la CRAC en la plaza pública del Estado. El sostén del paro magisterial indefinido planteó como posibilidad la caída de Ángel Aguirre, que con represión levantó ordenes de aprensión de los dirigentes de la CETEG (Minervino Morán, el secretario general) debilitando el paro magisterial, y posteriormente, aumentó la represión contra la CRAC con la detención de Nestora Salgado, líder de Olinalá, y con la división desde el interior de los grupos comunitarios con el nacimiento de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG).

Hoy con esta nueva masacre, el gobierno nacional afronta una importante crisis, sobre todo teniendo en cuenta que no sólo afecta la gestión de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeado recientemente por la masacre de Tlatlaya, Estado de México -también gobernado por el PRI, donde el ejército ejecutó a 22 jóvenes, sino que también han quedado expuestos los otros partidos del congreso: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna Guerrero a través de Ángel Aguirre y también el Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna en Puebla, donde hace poco un niño fue asesinado por la aplicación Ley Bala que legaliza el uso de la fuerza armada para reprimir la protesta social. Mientras tanto, la Marina detuvo a Salomón Pineda Villa, de quien se sospecha es jefe de la organización delictiva Guerreros Unidos, y es hermano de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca también del PRD. Según la investigación oficial Abarca, su esposa y su cuñado encabezaban este cártel. El matrimonio Abarca continúa prófugo: así la estrecha relación del PRD con el narcotráfico queda cada vez más en evidencia.

Esta masacre excede cualquier represión previa. Es una muestra de la unidad de los gobiernos capitalistas mexicanos y de todos sus partidos en el Congreso (PRI-PAN-PRD) en unidad con los grupos del narcotráfico (y en asociación) para liquidar a los opositores por izquierda de este régimen de la "alternancia". Esta masacre abominable es un crimen político sin precedentes en la historia

reciente del país y que desnuda la asociación de todos los partidos políticos del régimen con el crimen organizado y en contra de los luchadores sociales.

Es por esto que solicitamos a los señores legisladores, que acompañen el presente proyecto de declaración.